

**NOTA**

---

Asunto: **Informe resumido relativo a la sesión plenaria**  
**- Bruselas, 28 y 29 de octubre de 2002 <sup>1</sup>**

---

**I. APERTURA DE LA SESIÓN****1. Presentación por el Presidente del anteproyecto de tratado constitucional**

El Presidente ha presentado el proyecto de arquitectura del futuro tratado, elaborado por el Praesidium. Ha subrayado que se trata de un proyecto de tratado constitucional, lo que refleja la voluntad de la práctica totalidad de la Convención. El planteamiento por el que se ha optado se funda en el amplio consenso alcanzado durante el debate de la última sesión plenaria en favor del principio de una personalidad jurídica única, que ha abierto la vía a la fusión de los Tratados de la Comunidad y de la Unión Europea. Este texto único consta de tres partes:

- la primera contendría las disposiciones que definen la arquitectura institucional;
- la segunda se referiría a las políticas y acciones de la Unión;
- la tercera parte contendría las disposiciones finales y de continuidad jurídica habituales en este tipo de acto constitucional.

---

<sup>1</sup> La transcripción literal de la sesión plenaria puede consultarse en el sitio web, en la dirección siguiente: <http://european-convention.eu.int>

- a) La primera parte, que recoge las disposiciones fundamentales –por lo que debe resultar especialmente clara y contundente– contendría un preámbulo y a continuación definiría:
- Qué es la Unión (su definición y su naturaleza jurídica).
  - Por qué los Estados miembros han decidido reunirse (cuáles son los valores y los objetivos que los unen).
  - Qué significa ser un ciudadano de la Unión, y cuáles son los derechos fundamentales de la Unión.
  - Cuáles son las competencias de la Unión; se precisará que la Unión sólo tiene las competencias que se le atribuyan. Se afirmarán de manera precisa los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
  - Cuáles son las instituciones de la Unión.
  - De qué manera se organiza la ejecución de la actuación de la Unión, en aras de la sencillez, transparencia y eficacia.
  - Cuáles son los principios de la vida democrática de la Unión.
  - Financiación de la Unión.
  - Acción exterior de la Unión.
  - Relaciones entre la Unión y su entorno cercano.
  - El concepto de que la Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y derechos fundamentales y acepten sus normas.
- b) La segunda parte del tratado, sobre las políticas y acciones de la Unión, recogería un gran número de cláusulas de los Tratados actuales. Se introducirían modificaciones técnicas en los artículos relativos a las políticas de la Unión, que serían necesarias para poner en consonancia esta segunda parte con la primera.
- c) La tercera parte contendría disposiciones finales y de continuidad jurídica. A la vista del conjunto del proyecto –que responde a la voluntad de simplificación de la arquitectura del tratado– parecería lógico y prácticamente inevitable pensar que este nuevo tratado constitucional reemplazaría a los Tratados existentes. Partiendo de esta hipótesis, las disposiciones finales deberían contener las cláusulas que garanticen la continuidad jurídica en relación con la Comunidad y la Unión Europea.

El documento, difundido con la signatura CONV 369/02, contiene una segunda parte destinada a facilitar determinadas indicaciones acerca del contenido de las disposiciones de la parte fundamental del tratado. El propósito de dichas indicaciones es ilustrar la articulación de este proyecto de tratado constitucional e indicar el lugar que ocuparían en el texto los diferentes elementos.

El Presidente ha observado que algunas de estas indicaciones corresponden a orientaciones que se desprenden ya de los trabajos de la Convención; otras reflejan propuestas formuladas por distintas personas, que todavía requieren un debate o un estudio más detenido. La cuestión de la inclusión de algunos de estos artículos y de su contenido exacto encontrará respuesta en los trabajos futuros de la Convención.

El Presidente ha indicado que el Praesidium se propone presentar en los primeros meses de 2003, en función del resultado de los debates en sesión plenaria sobre las recomendaciones de los informes de los grupos de trabajo, secciones del proyecto de tratado enriquecidas con los elementos que se extraigan de dichos debates. De este modo, los bloques de construcción ocuparán su lugar en la estructura constitucional y la Convención podrá realizar su objetivo.

## **2. El papel de los parlamentos nacionales**

- Debate sobre el informe del Grupo IV "Parlamentos nacionales" presidido por la Sra. Stuart  
(doc. CONV 353/02)

La presidente del Grupo, D.<sup>a</sup> Gisela Stuart, ha presentado las conclusiones alcanzadas por el Grupo que se recogen en su informe final (CONV 323/02). El Grupo ha analizado el cometido de los parlamentos nacionales en relación con tres aspectos principales: fiscalización de la acción de sus gobiernos en el Consejo, control de la aplicación del principio de subsidiariedad, y papel y función de redes o mecanismos interparlamentarios multilaterales.

La presidente ha recordado la conclusión del Grupo de que el cometido fundamental de los parlamentos nacionales consiste en exigir responsabilidades a sus gobiernos cuando toman decisiones a escala europea. En el Grupo se llegó a un acuerdo general en cuanto a la utilidad de un intercambio de las prácticas más idóneas en materia de modelos de fiscalización, a fin de mejorar los sistemas nacionales. Por otra parte, el Grupo consideró que la transparencia del Consejo en su

actuación legislativa resulta esencial para permitir un control efectivo de los parlamentos nacionales. El Grupo ha formulado una serie de recomendaciones de medidas, incluido el refuerzo de las disposiciones del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales anejo al Tratado de Amsterdam. En materia de subsidiariedad, el Grupo refrendó, en líneas generales, las conclusiones del Grupo presidido por el Sr. Méndez de Vigo. Por último, el Grupo formuló varias recomendaciones relativas a la estructuración de las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. La presidente ha subrayado que el propósito general de las recomendaciones del Grupo consistía en potenciar la participación de los parlamentos nacionales en la UE, propiciar un sentimiento de implicación, y concederles una auténtica voz de manera constructiva, sin retrasar el proceso legislativo en el plano europeo. La presidente ha subrayado que, si bien el Grupo había logrado un consenso sobre muchos problemas, sus miembros estimaban que sería preciso un debate plenario sobre cuestiones institucionales antes de que pudieran adoptar posiciones firmes en relación con propuestas de un nuevo foro que agruparía a los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo para debatir, por ejemplo, las orientaciones políticas y la estrategia de la UE en líneas generales.

El debate general consecutivo a la presentación ha puesto de manifiesto un amplio apoyo de los miembros de la Convención al informe y las recomendaciones del Grupo. Cabe señalar lo siguiente como resultados del debate en torno a elementos concretos del informe:

Se ha reconocido ampliamente la importancia de una mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión: varios miembros han abogado por un reconocimiento expreso de su cometido en el futuro tratado constitucional. Se ha subrayado el papel de los parlamentos nacionales en el acercamiento de la Unión a sus ciudadanos.

Han recibido un amplio respaldo las medidas recomendadas para facilitar un mejor control por los parlamentos nacionales, dejando la organización del control nacional efectivo a cada uno de los Estados miembros, en consonancia con sus requisitos y parámetros constitucionales; se ha considerado que la transmisión directa de la documentación constituye un paso importante, ya que permite a los parlamentos nacionales acceder rápidamente tanto a los documentos consultivos como a las propuestas legislativas. Se ha destacado el hecho de que el informe contiene recomendaciones concretas que pueden llevarse a la práctica con rapidez. Muchos de los oradores han subrayado que la total transparencia del Consejo a la hora de ejercer sus funciones legislativas resulta esencial para un control parlamentario eficiente de la actuación de sus gobiernos en el Consejo, y han expresado su apoyo a las recomendaciones del Grupo en este sentido.

Muchos de los miembros han expresado su satisfacción por el respaldo del Grupo a las conclusiones del Grupo "Subsidiariedad", y muchos de ellos han destacado la importancia de la participación de los parlamentos nacionales en una fase temprana del proceso legislativo. Varios miembros han acogido con satisfacción las sugerencias del Grupo de potenciar el mecanismo de subsidiariedad. Se han referido, en particular, al vínculo entre subsidiariedad y proporcionalidad y a la propuesta de no restringir el derecho de recurso a los parlamentos nacionales que hubieran emitido un dictamen motivado en la fase inicial. Algunos de los miembros han reiterado su opinión de que las regiones con competencias legislativas deberían tener derecho de recurso en los ámbitos de sus competencias. Un miembro ha recordado sus dudas en relación con un mecanismo de alerta rápida.

Varios miembros han subrayado la importancia de la constitución de redes y del intercambio de las prácticas más idóneas, por considerar que éste es un medio más para mejorar la sensibilización de los parlamentos nacionales acerca de las actividades de la Unión Europea, y aumentar su capacidad de control eficaz. Han estimado que la COSAC, posiblemente reformada y reforzada, podría desempeñar un papel importante en tal sentido. Algunos han abogado por la creación de una pequeña secretaría de la COSAC.

La recomendación del Grupo de formalizar en el tratado el método de la convención como mecanismo previo para estudiar futuras modificaciones de éste ha recibido una acogida favorable. Algunos han sugerido que las convenciones no deberían limitarse necesariamente a la preparación de futuras modificaciones del tratado y conferencias intergubernamentales, sino que podrían tener un ámbito de actuación potencialmente mayor.

Gran parte del debate se ha dedicado al examen de ideas sobre la participación de los parlamentos nacionales en el debate de la UE sobre temas estratégicos y políticos fundamentales. Entre las ideas presentadas en este sentido –además del modelo de la convención– cabe mencionar la organización de semanas europeas una vez al año como vitrina común de debate sobre cuestiones europeas en cada Estado miembro, la organización de conferencias interparlamentarias sobre asuntos concretos, y la creación de un congreso.

Bastantes de los oradores se han mostrado reacios a prever la creación de nuevas instituciones u órganos, pues ello podría complicar aún más la arquitectura institucional, y en tal sentido han cuestionado la función de un congreso en el que se reunirían periódicamente los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Varios de los oradores han estimado que la Convención debería aplazar el estudio de la cuestión hasta el debate institucional más amplio que se efectuará más adelante. Algunos han considerado importante tener una idea clara y precisa de los objetivos y funciones de un posible nuevo mecanismo u órgano: algunos han opinado que bastaría con la posibilidad de convocar una convención, juntamente con otros medios existentes de establecimiento de redes entre los parlamentarios nacionales y europeos.

Sin embargo, varios oradores han apoyado la idea de un congreso a condición de que no posea poderes legislativos. Se han presentado algunas sugerencias sobre sus posibles funciones. Se ha alegado que un foro de estas características podría proporcionar un mayor control democrático del Consejo Europeo y debería considerarse complementario respecto del Parlamento Europeo. Las personas que han expresado interés en la idea de un congreso tenían opiniones divergentes acerca de si éste debería desempeñar una función en los nombramientos.

Al cerrar el debate, el Presidente ha extraído las siguientes conclusiones:

- Cabe hacer constar un amplio consenso en cuanto a la importancia de una mayor participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión, y el reconocimiento de su papel en el contexto del futuro tratado constitucional.
- Su participación debería consistir primordialmente en un control eficiente de la actuación de los gobiernos nacionales; por consiguiente, se acogen con satisfacción y cuentan con el respaldo de la sesión plenaria las propuestas del Grupo relativas a la transmisión directa de textos y otras medidas prácticas.
- Se reitera el respaldo a las recomendaciones del Grupo "Subsidiariedad" y a la creación de un mecanismo de alerta rápida.
- Se reconoce la necesidad de reforzar las posibilidades de consulta e intercambio de las prácticas más idóneas entre los parlamentos nacionales.
- Se han presentado varias ideas sobre el modo de mejorar la participación de los parlamentos nacionales en los debates sobre las grandes orientaciones de la Unión Europea, incluidas la formalización en el tratado constitucional del método de la convención, la organización de semanas europeas, de conferencias interparlamentarias sobre asuntos concretos, y la creación de un congreso en el que se reunirían periódicamente los parlamentarios nacionales y europeos. La Convención debería estudiar con más detenimiento el cometido y las funciones potenciales de un congreso; a juicio del Presidente, este congreso podría desempeñar un papel importante para la implicación de portavoces parlamentarios nacionales, juntamente con el Parlamento Europeo, en el acercamiento de los debates sobre temas de especial importancia (p.ej. las ampliaciones) a la atención de la opinión pública más amplia. La Convención debería volver sobre estos asuntos.

3. **Presentación por el Sr. Hänsch de la situación de los trabajos del Grupo VI  
"Gobernanza económica"**
4. **Presentación por el Sr. Christophersen de la situación de los trabajos del Grupo V  
"Competencias complementarias"**

La Convención ha escuchado intervenciones orales sobre los trabajos de estos dos Grupos, que presentarán sus informes en la próxima reunión (7 y 8 de noviembre).

**5. Carta de los Derechos Fundamentales**

- Debate sobre el informe del Grupo II, presidido por el Sr. Vitorino  
(doc. CONV 354/02)

Se había encomendado al Grupo presidido por el Comisario António Vitorino que estudiara:

- Modalidades y consecuencias de la posible incorporación de la Carta en los Tratados.
- Modalidades y consecuencias de la posible adhesión de la CE/UE al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos ("CEDH").
- Además, el Grupo estudió la cuestión de la tutela judicial efectiva y el acceso de los particulares al Tribunal de Justicia europeo.

En su introducción del debate, el Presidente ha felicitado a todos los miembros del Grupo y a su presidente por haber conseguido elaborar un informe con un alto grado de consenso. Los principales elementos del informe presentado por D. António Vitorino han sido los siguientes:

El Grupo ha subrayado que la decisión política sobre la incorporación de la Carta en los Tratados corresponde a la Convención. Sin embargo, todos los miembros del Grupo respaldan firmemente la incorporación en una forma que dé a la Carta carácter jurídicamente vinculantes y estatuto constitucional, o al menos no excluyen la posibilidad de estudiar con ánimo favorable dicha incorporación.

Por lo que atañe a las modalidades de la posible incorporación, las opciones básicas son las siguientes: **o bien** la inserción del texto de los artículos de la Carta al principio del tratado constitucional, en un título o capítulo de dicho tratado, **o bien** la inserción en un artículo del tratado constitucional de una referencia a la Carta; dicha referencia podría combinarse con la adjunción de la Carta al tratado constitucional, ya sea como una parte específica de dicho tratado que contenga exclusivamente la Carta o como un texto jurídico separado (p.ej. en forma de protocolo). Un miembro del Grupo estima que podría utilizarse una "referencia indirecta" a la Carta, para darle carácter jurídicamente vinculante sin que tenga estatuto constitucional.

A juicio del Grupo, el contenido fundamental de la Carta constituye un consenso conseguido por la anterior Convención: el Grupo no recomienda ninguna modificación en cuanto al fondo. Para darle carácter totalmente claro y estanco, sin embargo, han redactado y presentado propuestas de ajuste de algunas cláusulas horizontales contenidas en la Carta. Han estudiado asimismo otros asuntos, como el preámbulo de la Carta, la función de las Explicaciones del Praesidium, y la cuestión del apartado 2 del artículo 6.

Por lo que respecta a las modalidades y consecuencias de la posible adhesión de la CE/UE al CEDH, todos los miembros del Grupo estaban firmemente a favor –o dispuestos a estudiar con ánimo favorable– de la creación de una autorización constitucional que faculte a la Unión para adherirse al CEDH. En este sentido, el Grupo insistió en dos aspectos: la salvaguardia de la autonomía del Derecho de la Unión y del Tribunal de Luxemburgo, y la introducción de cláusulas técnicas de salvaguardia que precisen que la adhesión no modificará el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.

El Grupo estudió asimismo el actual sistema de recursos de que disponen los particulares en la Unión, a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En este contexto, el Grupo ha señalado a la atención de la Convención en particular la cuestión de si es preciso o no reformar las condiciones del acceso directo de los particulares al Tribunal (párrafo cuarto del artículo 230 del TCE), a fin de garantizar la tutela judicial efectiva. El Grupo se ha abstenido de formular recomendaciones concretas: en su lugar, ha elevado la cuestión del estudio más detenido de la posible reforma del párrafo cuarto del artículo 230 del TCE a la Convención, en un contexto adecuado.



En el debate general, los oradores han saludado mayoritariamente las conclusiones del Grupo y felicitado a éste y a su presidente por haber logrado elaborar un informe ampliamente consensuado sobre un asunto complejo que en el pasado había dado lugar a inquietudes y divergencias.

Una muy amplia mayoría de los oradores ha expresado su apoyo a la incorporación de la Carta en el tratado constitucional, dándole así el carácter de texto jurídicamente vinculante con estatuto constitucional, o bien han afirmado que (habida cuenta del entendimiento común alcanzado y las condiciones definidas por el Grupo) ahora están en condiciones de estudiar dicha incorporación con ánimo favorable, dejando atrás los desacuerdos del pasado. Se ha afirmado que los derechos fundamentales constituyen elementos que, al incorporar la Carta, encontrarán el lugar que les corresponde en la futura constitución de la Unión, y que tal incorporación seguiría la lógica de la evolución de una Comunidad económica a una Unión política de valores comunes.

Un miembro se congratuló de la utilidad y solidez del trabajo realizado por el grupo, que respondía a muchas de las dificultades que plantea la Carta, y afirmó que la decisión política sobre la incorporación debería tomarla la sesión plenaria en su debido momento. Otro miembro se refirió a las preocupaciones que persistían sobre la Carta, en particular, por lo que se refiere a sus disposiciones en materia de empleo y de asuntos sociales.

Por lo que respecta a la forma concreta de incorporación de la Carta, varios oradores se han inclinado por la inserción del texto de los artículos de la Carta en el tratado constitucional (opción "a" del informe del Grupo). En opinión de dichos oradores, con ello se reforzaría la perceptibilidad de los derechos fundamentales en el tratado constitucional y se expresaría claramente a los ciudadanos su elevado valor simbólico.

Otros miembros de la Convención han manifestado su preferencia por la segunda opción básica expuesta en el informe del Grupo, es decir la incorporación de la Carta mediante una adecuada referencia a la misma en un artículo del tratado constitucional, y la adjunción de la Carta al tratado como instrumento jurídico aparte, según han añadido algunos. Dichos oradores han alegado que esta técnica redundaría más en favor de un tratado breve y comprensible, preservaría mejor la integridad de la Carta y evitaría ciertas complicaciones técnicas que generaría la inserción directa del texto de la Carta en el tratado.

Un número mucho más reducido de oradores ha propugnado la inclusión de una referencia "indirecta" a la Carta en un artículo del tratado, en calidad de fuente para la interpretación de los derechos fundamentales como principios generales del Derecho de la Unión, alegando que no todos los artículos de la Carta podrían entrañar de igual modo derechos justiciables para los ciudadanos, o bien que algunos derechos de la Carta requieren una formulación más precisa.

La mayor parte de los oradores ha expresado su respaldo a los ajustes de redacción de las disposiciones horizontales de la Carta propuestos por el Grupo, y ha estimado que estos ajustes no constituyen modificaciones del contenido de la Carta. Varios oradores han celebrado estos ajustes pues refuerzan la seguridad jurídica y la claridad y permiten el reflejo en la Carta de las diversas tradiciones jurídicas, allanando así el camino para que la Carta se convierta en un texto jurídicamente vinculante. Otros oradores han expresado la opinión de que las cláusulas horizontales modificadas propuestas por el Grupo resultan innecesarias puesto que se limitan a afirmar lo que es evidente, pero que no resultan perjudiciales, por lo que pueden aceptarse si con ello se contribuye al consenso sobre la incorporación de la Carta como texto jurídicamente vinculante.

No obstante, varios de los miembros han formulado reservas sobre las modificaciones de los artículos horizontales propuestas por el Grupo, por considerar que son innecesarias o bien que reducen el grado de protección previsto por la Carta y son contrarias al criterio básico de respetar el contenido de la Carta. Se ha alegado, en particular, que la propuesta de apartado 5 del artículo 52 sobre los efectos de los "principios" de la Carta podría considerarse contraria a la obligación, consagrada en el apartado 1 del artículo 51, de observar dichos principios y promover su aplicación, y restringiría indebidamente la fuerza legal de dichos principios, que en opinión de dichos miembros deberían ser alegables ante los tribunales de manera general y no sólo por lo que atañe a los actos adoptados específicamente en aplicación de los principios. Uno de los miembros ha estimado que existen ambigüedades en la fórmula "respetando el principio de subsidiariedad" del apartado 1 del artículo 51 de la Carta, ha expresado dudas sobre la posibilidad de hacer cumplir algunas disposiciones de la Carta y ha subrayado la necesidad de saber cuáles de los artículos de la Carta constituyen derechos y cuáles constituyen principios.

Varios de los oradores han hecho hincapié en la necesidad de mantener el preámbulo de la Carta, que contiene afirmaciones importantes sobre la naturaleza fundamental de la Unión y representa un delicado consenso político alcanzado por la Convención anterior. Así pues, dichos miembros han abogado por que el preámbulo se incorpore al tratado constitucional o se utilice como preámbulo de éste.

Varios de los oradores han subrayado la importancia de las Explicaciones elaboradas a instancia del Praesidium de la anterior Convención. Pese a que –como señalaron algunos– carecen de valor jurídico, se consideran una ayuda extremadamente útil para la interpretación, por ejemplo por los tribunales y las autoridades de los países candidatos que no participaron en la redacción de la Carta, o bien como parte vital del conjunto político general de la Carta. En estas condiciones, los oradores han aprobado la recomendación del Grupo de incorporar las explicaciones dadas por el Grupo sobre

las modificaciones técnicas juntamente con las Explicaciones originales. Uno de los miembros ha recordado, sin embargo, que las Explicaciones se elaboraron bajo la responsabilidad exclusiva del Praesidium, y no vinculaban a la anterior Convención que había decidido no mantener un debate al respecto.

La gran mayoría de los oradores ha respaldado la inserción en el tratado constitucional de una autorización constitucional que faculte a la Unión para adherirse al CEDH. Varios oradores han celebrado, en este sentido, el consenso alcanzado por el Grupo acerca de cuestiones fundamentales que plantea la adhesión de la Unión al CEDH; se ha hecho hincapié, en particular, en que la adhesión no socavaría la autonomía del Derecho de la Unión ni la posición del Tribunal de Justicia; en que, mediante determinadas cláusulas de salvaguardia, se precisará que el alcance de la adhesión se limita a las competencias de la Unión, sin que suponga ampliación alguna de las mismas; y en que las posiciones nacionales expresadas respecto del CEDH y de sus protocolos no se verán afectadas. Otra idea expresada frecuentemente ha sido que la incorporación de la Carta y la adhesión de la Unión al CEDH no deben considerarse como opciones alternativas sino como iniciativas complementarias, que llevarán juntamente a una situación análoga a la de los sistemas jurídicos nacionales.

En este contexto, unos cuantos oradores han subrayado la importancia primordial que atribuyen a la adhesión de la Unión al CEDH y han recordado los principales argumentos en favor de la adhesión expuestos en el informe del Grupo. Algunos califican la adhesión de la Unión al CEDH de necesidad en caso de que la Carta adquiriera carácter jurídicamente vinculante, para garantizar una resolución adecuada de la cuestión de la relación entre los dos Tribunales Europeos; se ha formulado asimismo un llamamiento a una declaración política en favor de la adhesión que acompañe al tratado constitucional.

Otros miembros han opinado que la Convención debería limitarse a crear una base jurídica que faculte a la Unión para adherirse al CEDH, dejando a las instituciones de la Unión (con base en una decisión unánime del Consejo) la decisión de inicio de las negociaciones de adhesión y acerca de sus modalidades; uno de los miembros ha especificado que antes de tomar tal decisión deberá estudiarse si esta adhesión sería posible sin menoscabo de la autonomía del Derecho de la Unión, afectación de las posiciones individuales de los Estados miembros respecto del CEDH ni ampliación de las competencias de la Unión.

Un reducido número de miembros ha expresado reservas sobre la idea de la adhesión de la Unión al CEDH, abogando por una reflexión más profunda sobre si tal adhesión no conllevaría un alargamiento de los procedimientos judiciales o el riesgo de ampliar las competencias de la Unión, o iría en detrimento del Tribunal de Justicia.

Varios oradores han subrayado la importancia de la tutela judicial efectiva y han abogado por la ampliación del derecho de recurso de los particulares ante el Tribunal de Justicia, o bien han pedido que se estudie con más detenimiento la cuestión. Se ha alegado que actualmente existen lagunas en dicha tutela, dadas las estrictas condiciones impuestas por el párrafo cuarto del artículo 230 del TCE, el hecho de que este artículo sólo se refiere a recursos contra instituciones pero no contra los órganos de la Unión, así como las actuales limitaciones de la competencia en materia de justicia y asuntos de Interior. Un miembro ha propugnado un defensor del pueblo europeo más fuerte, a fin de reforzar la protección de las reclamaciones de los ciudadanos.

En una intervención final para responder a las afirmaciones formuladas durante el debate, el presidente del Grupo ha recalcado que el informe consensuado del Grupo representa un acuerdo transaccional. Ha explicado que la propuesta de texto del apartado 4 del artículo 52 consagraría en el tratado el planteamiento que ya aplica el Tribunal de Justicia, según el cual las tradiciones constitucionales comunes no obligan al Tribunal a atenerse a un mínimo común denominador sino a determinar los valores comunes de los Estados miembros, que no necesariamente están expuestos con el mismo alcance y significado en todas las constituciones. Ha subrayado además que la Carta hace ya una diferenciación clara e innegable entre derechos subjetivos y principios –que no conceden derechos automáticos a beneficios concretos sino que requieren actos de aplicación– diferencia que la nueva cláusula meramente expresaría con mayor claridad. Por lo que respecta a las "Explicaciones" de la Carta, ha confirmado que sería menester añadir las explicaciones del Grupo a las Explicaciones originales al avanzar los trabajos de la Convención; se ha mostrado dispuesto a asumir la labor de editar una versión consolidada, en estrecha consulta con los miembros del Grupo, para su presentación al Praesidium. Por último, el presidente del Grupo ha argumentado que la adhesión al CEDH no dará lugar a retrasos adicionales importantes de los procedimientos judiciales, dado que ya hoy los ciudadanos pueden –en los procedimientos nacionales relativos al Derecho de la Unión, alegar el CEDH y acudir ante el Tribunal de Estrasburgo; ahora bien, la adhesión permitiría en tales casos que la propia Unión, como autora de la presunta violación de los derechos humanos, defendiera sus actos, en lugar de forzar a los Estados miembros a asumir la defensa. Ha argumentado asimismo que resultaría extraño que la Unión, que exige la adhesión de los países candidatos al CEDH, no estuviera dispuesta a dar ese mismo paso.

El Presidente ha felicitado al Sr. Vitorino y expresado su pleno respaldo a su exposición sucinta y a sus reacciones frente al debate.

## 6. Debate preliminar sobre el anteproyecto de tratado constitucional

Los miembros de la Convención han dado a conocer sus opiniones preliminares sobre el anteproyecto de tratado constitucional, presentado por el Presidente en nombre del Praesidium.

La arquitectura del futuro tratado ha recibido una acogida favorable; la estructura se ha considerado adecuada, y los miembros de la Convención han saludado los elementos esenciales, a saber: su carácter constitucional, el hecho de que se trate de un tratado único, la atribución expresa de una personalidad jurídica única, la claridad y sencillez de la "columna vertebral", por constituir un importante paso adelante que responde a las expectativas de la Convención y de los ciudadanos.

Se han formulado asimismo observaciones más concretas:

- Varios de los convencionales han recalcado la importancia de los elementos sustanciales, especialmente en relación con las cuestiones institucionales, que enriquecerán la estructura; algunos han entrevisto ya en el proyecto de arquitectura una fórmula transaccional equilibrada; otros han supeditado su aprobación de la estructura a la solución a la que se llegue para las cuestiones institucionales.
- Algunos convencionales han subrayado con satisfacción que el anteproyecto podrá dar a los ciudadanos por fin la percepción de que forman parte de una unión política y no sólo de un mercado único.
- Algunos convencionales han sugerido que el artículo 1 haga referencia a los pueblos y no sólo a los Estados; se ha sugerido igualmente añadir que los ciudadanos de la Unión están unidos por los mismos valores.
- Algunos miembros han manifestado reticencias sobre la redacción del segundo guión del artículo 14 (pues temen que la expresión "acción conjunta de los Estados miembros" constituya un retroceso para determinadas políticas comunes).
- Algunos miembros han alegado que las nuevas políticas corresponden a las prioridades reales de la Unión, pero que su naturaleza es diferente de la de las políticas "comunitarias", por lo que deben ser objeto de procedimientos específicos.
- Varios miembros han mencionado la importancia de subrayar en el tratado el carácter multicultural de la Unión, y algunos se han referido a la importancia de mencionar la igualdad entre hombres y mujeres.
- Algunos miembros han considerado innecesario el debate sobre un nuevo nombre que se atribuiría a la nueva Europa, pues la denominación de Unión Europea se ha incorporado ya al lenguaje de los ciudadanos.

- Algunos miembros han abogado por que se mencione a los parlamentos nacionales en la parte fundamental del tratado.
- Se han formulado interrogaciones sobre la ciudadanía, las competencias, la inclusión en el proyecto de un título sobre "defensa" y de artículos sobre el congreso y la presidencia del Consejo, las disposiciones finales y los procedimientos de revisión del tratado.

Respondiendo a las observaciones y preguntas formuladas, el Presidente:

- Ha subrayado el importante avance que supone el tratado único con la desaparición de los pilares, lo que no implica automáticamente, sin embargo, la uniformación de los procedimientos y modalidades; podrían requerirse procedimientos específicos atendiendo a la naturaleza de determinadas políticas.
- Ha confirmado que los procedimientos de decisión, y en particular el procedimiento legislativo, se incluirán en la parte fundamental del tratado.
- Ha subrayado que no podrán citarse los parlamentos nacionales como una institución europea, sino que se mencionarán, en cambio, en el marco de los procedimientos en los que participarán (subsidiariedad).
- Ha recordado que las competencias están definidas ya en los Tratados actuales, pero que en el nuevo tratado se sistematizarían mejor.
- Ha observado que la defensa común existe ya como perspectiva en las disposiciones actuales del TUE (artículo 17).
- Ha reiterado que la existencia de determinados artículos y su contenido dependerán de los debates de la Convención; sin embargo, su mención en la estructura indica el sitio que en su caso ocuparán.

El Presidente ha concluido por señalar que, a partir de comienzos de 2003, el Praesidium, basándose en los elementos de fondo que se deriven del debate sobre las conclusiones de los grupos de trabajo, podrá proceder a formular propuestas más elaboradas. Las cuestiones institucionales, sobre las que convendrá mantener una visión de conjunto, no se encomendarán a grupos de trabajo sino que se debatirán en sesión plenaria.

## **II. PRÓXIMA SESIÓN DE LA CONVENCION**

El Presidente ha anunciado que la próxima reunión de la Convención se celebrará el jueves 7 de noviembre a partir de las 15.00 h y el viernes 8 de noviembre a partir de las 9.30 h. Se dedicará al estudio de los informes de los Grupos "Gobernanza económica" y "Competencias complementarias" así como al debate sobre "la Europa social".

---

**CONVENCIÓN EUROPEA**

**Sesión plenaria de 28 y 29 de octubre de 2002**

**LISTA DE ORADORES**

**por orden de intervención**

Lunes 28 de octubre

**2. Papel de los parlamentos nacionales (doc. CONV 353/02)  
Debate sobre el informe del Grupo IV "Parlamentos nacionales" presidido por la  
Sra. Stuart**

1. D. Erwin TEUFEL - Alemania (Parlamento)
2. D. Dick ROCHE - Irlanda (Gobierno)
3. D. Joschka FISCHER - Alemania (Gobierno)
4. D. Soren LEKBERG - Suecia (Parlamento)
5. D. Michel BARNIER - Comisión
6. D. Elmar BROK - Parlamento Europeo
7. D. Pierre LEQUILLER Francia (Parlamento)
8. D. Henrik HOLOLEI - Estonia (Gobierno)
9. D. Kimmo KILJUNEN - Finlandia (Parlamento)

*(Tarjeta azul: Caspar EINEM)*

10. D. Jürgen MEYER - Alemania (Parlamento)
11. D. M. Andrew DUFF - Parlamento Europeo
12. D. Alfonso DASTIS España (Gobierno)
13. D. Tunne KELAM - Estonia (Parlamento)
14. D. Aloiz PETERLE - Eslovenia (Parlamento)
15. D. Henrk Dam KRISTENSEN - Dinamarca (Parlamento)
16. D. Mesut YILMAZ - Turquía - (Gobierno)

*(Tarjeta azul: G. AMATO)*

17. D.<sup>a</sup> Eduarda AZEVEDO - Portugal (Parlamento)
18. D. Hubert HAENEL - Francia (Parlamento)
19. D.<sup>a</sup> Pervenche BERES - Parlamento Europeo

*(Tarjetas azules:*

*HAIN, MC CORMICK, PIETERS, MCLENNAN, FAYOT, DI RUPO, VOGGENHÜBER)*

20. D. Proinsias DE ROSSA - Irlanda (Parlamento)



21. D. Josep BORRELL FONTELLES - España (Parlamento)
22. D. Matti VANHANEN - Finlandia (Parlamento)
23. D. Íñigo MÉNDEZ de VIGO - Parlamento Europeo
24. D.<sup>a</sup> Hanja MAIJ-WEGGEN - Parlamento Europeo
25. D.<sup>a</sup> Dalia KUTRAITE-GIEDRAITIENE - Lituania (Parlamento)
26. D. Gianfranco FINI - Italia (Gobierno)
27. D. Pierre MOSCOVICI - Francia (Gobierno)
28. Ali TEKIN - Turquía (Parlamento)
29. D. William ABITBOL - Parlamento Europeo
30. D. David HEATHCOAT-AMORY - Reino Unido (Parlamento)
- (*Cartons bleus* :BRUTON, TOMLINSON, MÉNDEZ DE VIGO)
31. D. Pierre CHEVALIER - Bélgica (Gobierno)
32. D. Alberto COSTA - Portugal (Parlamento)
33. D. Lamberto DINI - Italia (Parlamento)
34. D. Hannes FARNLEITNER - Austria (Gobierno)
35. D. Frans TIMMERMANS - Países Bajos (Parlamento)
36. D. Edvins INKENS - Letonia (Parlamento)
37. D. Panayotis DEMETRIOU - Chipre (Parlamento)

**LISTA DE ORADORES**  
**por orden de intervención**

5. **Carta de los Derechos Fundamentales (doc. CONV 354/02)**  
**- Debate sobre el informe del Grupo II presidido por el Sr. Vitorino**

1. D. Ernani LOPES - Portugal (Gobierno)
  2. D. Íñigo MÉNDEZ de VIGO - Parlamento Europeo
  3. D. Alexander ARABADJIEV - Bulgaria (Parlamento)
  4. D. Andrew DUFF - Parlamento Europeo
  5. D. René van der LINDEN - Países Bajos (Parlamento)
  6. D. Peter HAIN - Reino Unido (Gobierno)
  7. D. Ben FAYOT - Luxemburgo (Parlamento)
  8. D. Olivier DUHAMEL - Parlamento Europeo
  9. D. Jürgen MEYER - Alemania (Parlamento)
  10. D. Alfonso DASTIS (España) Gobierno
  11. D. Dick ROCHE - Irlanda (Gobierno)
- (Tarjetas azules: Caspar EINEM, S. KAUFFMANN)*
12. D. Diego LÓPEZ GARRIDO - España (Parlamento)
  13. D.<sup>a</sup> Neli KUTSKOVA - Bulgaria (Gobierno)
  14. D. Neil Mac CORMICK - Parlamento Europeo
  15. D. A. Emre KOCAOĞLU - Turquía (Parlamento)
  16. D. Hubert HAENEL - Francia (Parlamento)
  17. D. Reinhard RACK - Parlamento Europeo
  18. D. Jozef OLEKSY - Polonia (Parlamento)
  19. D. Timothy KIRKHOPE - Parlamento Europeo
  20. D. Peter SERRACINO-INGLOTT - Malta (Gobierno)
  21. D. Mihael BREJC- Eslovenia (Parlamento)
  22. D. Gianfranco FINI - Italia (Gobierno)
  23. D.<sup>a</sup> Anne VAN LANCKER - Parlamento Europeo
  24. D. Gabriel CISNEROS LABORDA - España (Parlamento)
  25. D.<sup>a</sup> Elena PACIOTTI - Parlamento Europeo

26. D. Ingvar SVENSSON - Suecia (Parlamento)
  27. D.<sup>a</sup> Cristiana MUSCARDINI - Parlamento Europeo
  28. Pierre MOSCOVICI - Francia (Gobierno)
  29. D.<sup>a</sup> Lena HJELM-WALLEN - Suecia (Gobierno)
  30. D. Niels PETERSEN - Dinamarca (Parlamento)
- (Tarjeta azul: Peter HAIN, HELLE)*
31. D. Alberto COSTA - Portugal (Parlamento)
  32. D. Gijs de VRIES - Países Bajos (Gobierno)
  33. D. Henning CHRISTOPHERSEN - Dinamarca (Gobierno)
  34. D.<sup>a</sup> Hanja MAIJ-WEGGEN - Parlamento Europeo
  35. D. John BRUTON - Irlanda (Parlamento)
  36. D.<sup>a</sup> Eleni MAVROU - Chipre (Parlamento)

**Debate preliminar sobre el anteproyecto de tratado constitucional**

Presidente: D. Valéry Giscard d'Estaing

1. D. Klaus HÄNSCH - Parlamento Europeo
2. D.<sup>a</sup> Ana PALACIO (España) Gobierno
3. D. Andrew DUFF - Parlamento Europeo
4. D. Michel BARNIER - Comisión
5. D. Rytis MARTIKONIS - Lituania (Gobierno)
6. D. Hubert HAENEL - Francia (Parlamento)
7. D. Josep BORRELL FONTELLES - España (Parlamento)
8. D. Ernani LOPES - Portugal (Gobierno)
9. D. Gijs de VRIES - Pays Bas (Gobierno)
10. D. Alan LAMASSOURE - Parlamento Europeo
11. D. Peter HAIN - Reino Unido (Gobierno)
12. D. Rihards PIKS - Letonia (Parlamento)
13. D.<sup>a</sup> Danuta HŰBNER - Polonia (Gobierno)
14. D. Marco FOLLINI - Italia (Parlamento)
15. D. Dick ROCHE - Irlanda (Gobierno)
16. D.<sup>a</sup> Teija TIILIKAINEN - Finlandia (Gobierno)
17. D.<sup>a</sup> Marietta GIANNAKOU - Grecia (Parlamento)
18. D.<sup>a</sup> Hanja MAIJ-WEGGEN - Parlamento Europeo
19. D. Elmar BROK - Parlamento Europeo
20. D. Ben FAYOT - Luxemburgo (Parlamento)
21. D.<sup>a</sup> Michael FRENDO - Malta (Parlamento)
22. D.<sup>a</sup> Linda McAVAN - Parlamento Europeo
23. D.<sup>a</sup> Lena HJELM-WALLEN - Suecia (Gobierno)
24. D. Elio DI RUPO - Bélgica (Parlamento)
25. D. Jen-Peter BONDE - Parlamento Europeo
26. D. Pierre MOSCOVICI - Francia (Gobierno)